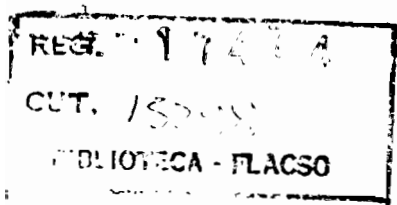


Cultura política y democratización

Biblioteca de Ciencias Sociales
Directores: Mario R. dos Santos
y Cristina Micieli.
Programa de Publicaciones
Asistente: Ariel Sher.



I.S.B.N.

Diseñador de portada: Pepa Foncea.

Corrector de pruebas: Leonel Roach.

Inscripción N° 67.603

Impresor: Salesianos.

Bulnes 19. Santiago de Chile.

Primera Edición: agosto de 1987.

Copyright de todas las ediciones en español por

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Av. Callao 875, 3er. piso, 1023 Buenos Aires, Argentina.

Composición: Compoláser,

Av. Providencia 329, 3er. piso, Santiago de Chile.

INDICE

	Página
Presentación	7
I	
Del radicalismo reivindicativo al pluralismo radical, <i>Ludolfo Paramio</i>	17
Rasgos básicos en la transformación de la cultura política española, <i>Rafael del Aguila</i>	25
Notas sobre el fenómeno ETA, <i>Javier Garayalde</i>	33
II	
La trama cultural de la política, <i>Oscar Landi</i>	39
Política y militancia: ¿hacia el fin de una cultura fragmentada?, <i>Vicente Palermo</i>	66
Consenso democrático en el Chile autoritario, <i>Angel Flisfisch</i>	99
La cultura política de la juventud popular del Perú, <i>Julio Cotler</i>	127

III

La cultura política de las mujeres, <i>Judith Astelarra</i>	149
Una gramática postmoderna para pensar lo social, <i>Benjamín Ardití</i>	169
Movimientos sociales y gestación de cultura política. Pautas de interrogación, <i>Fernando Calderón y Mario R. dos Santos</i>	189

IV

Gramsci y el sentido común, <i>José Nun</i>	199
El concepto de lo político según Carl Schmitt, <i>Franz Hinkelammert</i>	235
La democratización en el contexto de una cultura postmoderna, <i>Norbert Lechner</i>	253

LA CULTURA POLITICA DE LA JUVENTUD POPULAR DEL PERU*

Julio Cotler

Una de las características más notorias del Perú ha sido la persistente presencia y vigencia de su herencia colonial, que ha contribuido de manera decisiva a enraizar las prácticas y los horizontes tradicionales, si no arcaicos, de la sociedad, la política y la cultura.

En este sentido, diversos sujetos sociales y políticos, marcos institucionales y orientaciones culturales han intervenido para resistir la aplicación de medidas que adecuaran el país a la modernidad, postergando indefinidamente su puesta al día. Es decir, un conjunto de factores han bloqueado el llevar a la práctica medidas destinadas a propiciar la democratización y nacionalización de la sociedad y la política, impidiendo la aproximación e identificación entre los distintos conjuntos sociales y el Estado; dificultando, asimismo, el establecimiento de relaciones institucionalizadas fundadas en una sostenida y amplia legitimidad social.

De ahí, precisamente, el "atraso" que presenta el Perú en el ámbito sudamericano, no sólo por la naturaleza extremadamente heterogénea, polarizada y segmentada de su estratificación social, que se asocia con fórmulas y métodos igualmente dispares y contrapuestos de explicación y de interpretación de los distintos fenómenos de su realidad, sino también por la secular debilidad y carencia de mecanismos que articulen institucionalmente a la sociedad y el Estado. De donde resulta, a su vez, que los distintos conjuntos sociales se perciban como ajenos y enemigos y que los conflictos sociales deriven en situaciones inmanejables y represivas, de carácter cuasipretorianas.

* Este documento forma parte de la investigación "Radicalización y violencia política de la juventud popular" que el autor dirige en el Instituto de Estudios Peruanos.

Sin embargo, durante las tres últimas décadas ese peculiar "carácter nacional" se viene enfrentando a una serie de abruptas transformaciones y rupturas que sacuden sus arraigadas estructuras sociales, desintegrando -finalmente- el régimen de dominación oligárquico, y en particular sus rasgos y elementos coloniales.

En los casos más dramáticos, esas experiencias han producido la descomposición de las tradicionales identidades y referencias culturales que secularmente han orientado el comportamiento social y político. En las circunstancias menos traumáticas y que parecen ser las más frecuentes, se han ido desarrollando múltiples formas de adaptación cultural a las nuevas condiciones, determinando la existencia de soluciones de continuidad cultural que permiten el ajuste de la población a los nuevos requerimientos asociados a las transformaciones en curso.

Pero, cualquiera sea el caso, a partir de mediados de los años cincuenta, dichos cambios han creado el espacio necesario para la constitución de sujetos e instancias sociales, que a través de nuevos temas y formas de identificación y de intergración colectivos hacen posibles el desarrollo y afirmación de nuevas identidades sociales y políticas.¹

La modernización y la modernidad.

Como se dijo antes, a partir de mediados de la década del cincuenta el Perú comenzó a experimentar una serie de cambios que trastocaron definitivamente su ordenamiento tradicional. En ese cuadro de verdadera inflexión histórica, la juventud de las clases populares ha experimentado con especial vehemencia las diferentes transformaciones que se han venido sucediendo en los distintos planos de la existencia social, al mismo tiempo que ha constituido el principal agente de dichas transformaciones.

Desde entonces el país ha venido experimentando una serie de cambios demográficos, a raíz de la creciente migración del campo a la ciudad, determinando un rápido proceso de urbanización y de relativa modernización de la sociedad. Sin embargo, los marcados contrastes y oposiciones entre el mundo urbano y rural, capitalino y provinciano, criollo y andino, condicionaron que el traslado de la población rural, provincianos y serranos a las ciudades costeras, especialmente a Lima, produjera un proceso que involucraba, contradictoriamente, una situación de enfrentamiento, a la vez que de encuentro y adaptación de diferentes segmentos y capas sociales.

¹Cotter, J. Clases, *Estado y nación en el Perú*, Lima. Instituto de Estudios Peruanos, 1978.

Mientras los residentes de las ciudades percibían este movimiento poblacional como una invasión de elementos extraños e indeseables, los recién llegados -serranos en su mayoría- tuvieron que resistir la hostilidad de los nativos y desplegar un conjunto de iniciativas a fin de adaptarse y adaptar el entorno a sus necesidades y aspiraciones. Por todo esto, el desplazamiento tuvo un carácter de *inmigración* más que de simple migración, en la medida en que la población movilizaba se trasladaba a un ambiente, literalmente; extraño.

Sin embargo, el creciente peso e importancia de estos "inmigrantes internos", así como su progresiva incorporación en los distintos planos de la sociedad, condicionó la identificación y articulación de intereses sociales, más allá de las afinidades corporadas de naturaleza adscriptiva, contribuyendo a la formación de clases nacionales y, en esa medida, favoreciendo el proceso de intergración nacional.

También desde mediados de la misma década de 1950 se iniciaron importantes modificaciones en la estructura productiva y ocupacional que promovieron la expansión urbana y capitalista, su penetración en las áreas rurales, el resquebrajamiento y disolución de las formas patrimoniales y corporativas de propiedad y dominación.

Paralelamente a estos cambios y a la diferenciación social en curso, se procesa una creciente *individuación*; es decir, la singular capacidad de percibir, juzgar y decidir sobre proyectos particulares, distinguiéndolos y aislándolos de las prácticas y rituales colectivos. Esta transformación también participaría en difuminar las tradicionales formas de referencia e identificación de naturaleza corporativa-colonial por las de asociación voluntaria destinada, de manera explícita y exclusiva, a lograr articular colectivamente determinados intereses sociales.²

A los factores anotados se añaden la sustancial ampliación del sistema educacional y de los medios de comunicación de masa, que contribuyeron de manera significativa en alterar la configuración cultural del país, desde la lengua y los usos idiomáticos de amplios sectores de la población, pasando por las formas de vestir. Las expresiones musicales, las prácticas culinarias y los comportamientos recreativos, hasta los motivos y las modalidades asociativas, los tipos y niveles de las aspiraciones sociales. Es decir, cambios que significan una verdadera ruptura y transformación cultural de muy amplios contingentes populares de origen campesino, enmarcados en situaciones de discriminación racial, étnica y de explotación típicamente colonial.

Estas situaciones impulsaron, definitivamente, la reorganización

² En estas condiciones de desarrollo individual se plantearía la formación de estructuras yoicas. Sobre este tema ver de Max Hernández, et. al., *Entre el mito y la historia. Psicoanálisis y Pasado Andino*, Ediciones Psicoanalíticas Imago, Lima 1987.

de la sociedad, con la consiguiente emergencia de nuevos actores y la sustantiva ampliación de la participación política popular, dando lugar a la formación de identidades sociales y políticas fundadas en las nuevas referencias clasistas y populares que se iban forjando alrededor de las inéditas prácticas asociativas de carácter laboral y residencial. Mientras, el viejo edificio corporativo/estamental, fundamento de la fragmentación social y del clientelismo político tradicional, se resquebrajaba y sus representantes perdían significación en la sociedad.

Paralelamente a estos fenómenos, el país ha tenido una sucesión de diferentes "experimentos" políticos, todos ellos frustrados en su propósito de avanzar de manera sustancial en la integración económica, social y política de la población a fin de asegurar la constitución de una comunidad nacional.

Sin embargo, la singularidad de las reformas ejecutadas por el "gobierno revolucionario de la fuerza armada" (1968-1980) impulsaron decididamente la quiebra del régimen oligárquico y el desarrollo de imágenes y reivindicaciones nacionales, populares y democráticas, a la par que expandieron las funciones y los compromisos estatales con la sociedad y especialmente con las clases populares y medias. En ese mismo sentido, la movilización popular de los setenta y la transferencia del poder de los militares a los civiles, decidieron la extensión de los derechos de ciudadanía al universo popular rural y urbano, el reconocimiento de la legitimidad de sus demandas sociales y la necesidad de canalizarlas a través de instancias de mediación política y estatal.

Es en este escenario de transformación y de movilización de la población popular donde se perciben con especial crudeza las profundas fisuras de carácter racial, étnico, social y regional que siguen dividiendo y oponiendo a distintos sectores y clases de la sociedad, y donde se develan con nitidez la precariedad de las instituciones para procesar, atacar y dar solución a dichas situaciones, condicionando el desarrollo de orientaciones y compartamientos radicales y subversivos que lleva al Perú a una situación límite, que parece bordear un proceso de desintegración y de guerra civil.

La modernización y la modernidad de la juventud popular

Como se dijera anteriormente, la juventud de las clases populares ha constituido un agente especialmente activo en el desarrollo de las transformaciones que, en diferentes planos de su existencia, viene experimentando la sociedad peruana en el curso de las últimas tres décadas. En efecto, fue esta juventud la que en la década de los

cincuenta y sesenta se trasladó a las ciudades y vivió los cambios ocupacionales, culturales y políticos de entonces. Luego, la primera y segunda generación, con la capacitación intelectual y asociativa lograda en las universidades y en las organizaciones gremiales, políticas y residenciales, dirigieron el proceso de radicalización y violencia política, desarrollada a partir de la década del sesenta.

Esta reformulación contemporánea de la cultura política popular la experimentó y procesó la juventud popular a partir de sus experiencias de cambio y movilización, asociadas al desplazamiento de las estructuras tradicionales de organización y de dominación.³ Sólo más tarde las organizaciones políticas que aparecieron o reaparecieron en el escenario social en respuestas a estos acontecimientos buscaron organizar y socializar a esta población movilizada.

Pero en esta dialéctica entre sociedad y política se sigue observando el desarrollo de pautas y orientaciones culturales contradictorias, que dan cuenta de la continua vigencia de la tradición. Mientras que de un lado se propugna y se propende a la democratización de la sociedad -vale decir, a percibir y lograr la constitución de relaciones de carácter igualitario principalmente en los planos económicos y sociales de la sociedad- de otro lado se favorece y se practican fórmulas elitistas y autoritarias de comportamiento político, que tienden a reproducir las imágenes y los modos de acción propios de los regímenes oligárquicos patrimoniales. Es decir, se plantea una situación en la que se persigue una "democratización de la sociedad por la vía autoritaria".⁴

Durante los años cincuenta y sesenta un grueso contingente de jóvenes provincianos "emigraron" a las ciudades más importantes de la costa, principalmente a Lima, a fin de aprovechar las múltiples oportunidades sociales concentradas en los centros donde se generaba la nueva dinámica capitalista del país. Siguiendo una tradición que se había iniciado en las décadas anteriores, los hijos de los terratenientes y de las capas medias de las pequeñas y medianas ciudades tradicionales se trasladaron cada vez en mayor número y frecuencia a las ciudades, siguiéndoles los pasos los hijos de los artesanos y pequeños propietarios. Sin embargo, lo novedoso fue la incorporación masiva del campesino-indígena en este movimiento poblacional, llegando a inundar y transformar socialmente las "blancas" y criollas ciudades del país.

³Una situación bastante similar sucedió en la década de 1920 y 1930. Entonces, el desarrollo capitalista promovió diferentes modalidades de cambio y movilización, que derivaron en la formación de ideologías y organizaciones políticas que socializaron a las capas populares movilizadas. Ellas siguen teniendo vigencia y validez en el Perú de hoy, debido a lo que dijéramos anteriormente respecto de la persistente postergación de la aplicación de medidas que adecuaran el país a su modernidad.

⁴Cotter, Julio, "La democracia en el Perú", Congreso de Sociología, 1981. Del mismo autor, "Partidos políticos, elecciones y democracia". 1987.

En el curso de la transformación social, esta población persiguió incorporarse activa y decididamente en los mecanismos que le permitiera ascender en las nuevas escalas sociales que el capitalismo construía, desbloqueando y descongelando las rígidas formaciones sociales tradicionales. Para esto la juventud popular, provinciana y nativa, buscó y encontró, con relativa facilidad, empleos remunerados en la nueva estructura productiva que se venía desarrollando. Luego, un sector se incorporó en el llamado mercado "informal", en razón de los bajos salarios ofrecidos por las empresas, del ahorro realizado por la unidad doméstica y, también, por sus aspiraciones de movilidad social.

Paralelamente, esta juventud provinciana ingresó masivamente al sistema educativo, determinando un rápido y brusco incremento de la población escolar y escolarizada. Este fenómeno modificó de manera radical la composición social del estudiantado, tanto de la secundaria como de la universitaria, repercutiendo de manera significativa en la ampliación y remodelación de los sectores medios y muy particularmente de las capas profesionales del país, así como en la recreación del perfil social y cultural de los trabajadores.

Estos hechos tendrían, a su vez, efectos decisivos en el futuro panorama de la sociedad y la política peruanas, el favorecer la constitución de una nueva y joven intelectualidad que organizó nuevos modelos explicativos de la realidad y formuló nuevos proyectos políticos, en los que se incorporaron intereses y preocupaciones de carácter popular y provinciano. Estos, a su vez, tendrían una muy amplia difusión en el nuevo universo popular urbano, principalmente a través del magisterio y estudiantado que se concentraba en las aulas escolares y universitarias.

Este desarrollo educacional también repercutió en el desarrollo de la capacidad organizativa e ideológica de los trabajadores, condicionando que, nuevamente, como en la década de los treinta, se observara un encuentro e integración entre esta nueva intelectualidad y las nuevas clases populares, en las que el componente juvenil, popular y provinciano constituía un elemento básico de articulación.

Asimismo, los jóvenes "inmigrantes", provenientes de las distintas geografías del país, se encontraron y se fueron reconociendo como *peruanos* y situados socialmente en una posición similar, en contraposición a los "otros", en las principales ciudades y muy especialmente en Lima. Los barrios populares, los lugares de trabajo, las aulas, sus lugares y particulares formas recreativas, les dieron la oportunidad de ligarse más allá de los estrechos marcos localistas y endogámicos favoreciendo, en cambio, la relación y acoplamiento de las varias tradiciones locales, dando lugar a visiones e identidades nacionales.

Paralelamente a la fundación de estos hogares "peruanos", se observó la tenaz construcción colectiva de sus nuevos barrios y vivien-

das, remodelando el paisaje urbano y la rutina de la sociedad.⁵ Pero desde el momento mismo en que se desarrollaba el proceso migratorio de estos "pioneros" de la conquista urbana, como Degregori, et al, califican a estos jóvenes provincianos,⁶ se observaba el despliegue de nuevos rasgos culturales que impulsaban, a su vez, los cambios estructurales en marcha de la sociedad peruana y el desarrollo de su modernidad.

El mismo hecho de la inmigración, con lo que ella supone en términos de relativa separación y distanciamiento, si no ruptura, con los términos tradicionales de asociación y referencia de los lugares de origen, propugna la innovación social y el riesgo como parte constitutiva de la "la superación" individual. La movilidad social, objetivo primordial y explícito de dicha "superación" se materializaría mediante la educación y la profesionalización.

Pero esta creencia en la capacidad de la educación como medio de inserción y de cambio en la nueva sociedad que se diseñaba, no fue exclusiva al ámbito urbano, sino que se extendió también al rural. De hecho, ahí se inicia y se desarrolla la socialización de los jóvenes para que, llegado el momento, abandonen el reducto paterno y se arriesguen a buscar su promoción -su superación- en la escala social urbana, para arrastrar consigo al conjunto familiar. De ahí que desde los años sesenta se conoce que los campesinos tienen expectativas muy altas de educación para sus hijos.⁷ De otro lado, Montoya da cuenta de la existencia del "mito de la escuela" entre la población rural e indígena del país, consistente en el hecho que se asocia la escolaridad con la luz y el analfabetismo y el quechua con la oscuridad.⁸ Es decir, que la educación, alfabetización y castellanización se asociaron de manera íntima con la perspectiva de la movilidad social paralelamente con las instancias de cambio, riesgo y de innovación social.

Es decir, la "superación" sería concebida como el permanente desarrollo de una firme voluntad y el despliegue de esfuerzos individuales -el que quiere puede- y también colectivos, sea de las familias y/o de las comunidades de origen⁹ en una permanente *lucha* contra los obstáculos

⁵Sobre los problemas relativos a los cambios demográficos, ocupacionales y económicos experimentados en el curso de las últimas décadas ver de Efraín González, César Herrera, Francisco Verdura, *Crecimiento económico y sectores populares de Lima Metropolitana, 1940-1985*, IEP (en prensa).

⁶Degregori, Carlos Iván, Blondet Cecilia, y Lynch, Nicolás *Conquistadores de un nuevo mundo: de invasores a ciudadanos*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1987.

⁷Alberti G., y Cotler, J., *Aspectos sociales de la educación rural en el Perú*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 1972.

⁸Montoya, R. Silveira M. J. Lindoso, F. J. *Producción parcelaria y universo ideológico, el caso de Puquio*, Lima, Mosca Azul editores, 1979.

⁹Con respecto a la capacidad empresarial la población migrante en función de su integración comunitaria, Jurgen Golte y Norma Adams, *Los caballos de Troya de los invasores; estrategias campesinas en la conquista de la gran Lima*. Lima, IEP, 1987.

naturales y sociales, para *conquistar* la ansiada meta. Así, el desarrollo "racionalizado" de esfuerzos y actividades se encontraron ligados a las promesas de la modernidad, plasmadas en la movilidad social.

En la medida en que capas importantes de la población popular de las ciudades lograron alcanzar algunos de estos objetivos, incorporándose en la nueva dinámica social, ganaron confianza y seguridad en la validez y en la posibilidad de esfuerzo para seguir superándose y mejorar en sus condiciones de vida, proyectándose en sus hijos, es decir, en la siguiente generación de jóvenes de los años 70, la culminación de la ansiada movilidad social.

La idea del "campesino pasivo" o la del indígena "indolente", estereotipos formados por la dominación oligárquica, se verían doblemente desautorizados por estas nuevas modalidades de comportamiento de los migrantes y por las movilizaciones campesinas que se desarrollaron a partir de la década de 1950. Igualmente, la esperanza mística que el cuerpo del Inca se reconstituiría y convocaría a su "nación" para expulsar al "conquistador", dando paso a la reorganización del "paraíso perdido" de la antigüedad, se encontraría en dura competencia con el desarrollo del "mito de la superación".¹⁰

Radicalidad y Violencia política.

Pero en el curso de las mencionadas transformaciones los inmigrantes, especialmente los serranos, tuvieron que atravesar un conjunto de experiencias plagadas de dificultades y carencias, engaños, desprecio y violencia, originadas por las tradicionales capas medias y populares urbanas. En ese mismo sentido intervinieron las distintas manifestaciones de la explotación y la sujeción que el capital y el Estado vinieron a ejercer *directamente* sobre esta población.

Estas traumáticas experiencias hicieron que esta población *tuviera que aprender* a organizarse alrededor de intereses específicos, dejando a un lado las pautas de carácter adscriptivo. Es así como desarrollaron nuevas formas de asociación y de identidad colectivas, alrededor de la defensa del barrio y de la vivienda, del salario y del empleo, de la educación y la salud, del transporte y la recreación. Pero, además, los jóvenes migrantes serranos, que vivían el desplazamiento de su universo sociocultural y que resentían duramente los prejuicios y la

¹⁰Degregori, Carlos I. "Del mito de Inkari al mito del progreso. Poblaciones andinas, cultura e identidad nacional, *Socialismo y Participación*, Núm. 36, págs. 49-56, enero 1987. Del mismo autor, ver asimismo el epílogo de *Conquistadores del nuevo mundo: de invasores a ciudadanos*. ob. cit.

discriminación, también tuvieron que aprender a organizarse en términos étnico-regionales, a fin de resistir, acomodarse y superar las nuevas y duras condiciones ciudadinas.

Este aprendizaje significó un avance fundamental en la asimilación de los intereses de movilidad individual y familiar con los de naturaleza colectivos. De esta manera se crearon las bases institucionales para el desarrollo de una autoidentificación y autoafirmación de la población popular, y en esa misma medida, a la constitución de las clases populares, en función a la defensa de sus intereses y en oposición a quienes los explotaban y rechazaban reconocer la validez de sus reclamos por extender su participación en los diferentes planos de la sociedad.

Este aprendizaje colectivo de organización, sobre bases "universalistas", se reprodujo en múltiples y muy diferentes instancias y modalidades asociativas, creando las bases de construcción de una sociedad nacional y los gérmenes de una sociedad civil en el nivel popular. De ahí que esta innovación social marcaría, y de manera decisiva, el futuro desarrollo político de estas clases y con ellas, del país.

En esa medida, estos sectores sociales que recién se incorporaban en la vida urbana y nacional, descubrieron sus derechos de ciudadanía y la responsabilidad que el Estado tenía con ellos, en tanto entidad encargada de organizar equitativamente la distribución de los recursos y las oportunidades sociales, a fin de hacer posible el éxito del "esfuerzo", destinado a lograr la ansiada "superación".

Pero también aprendieron que no era suficiente articular sus intereses específicos de carácter inmediato y de inscribir sus demandas en los mecanismos legales para recibir una respuesta rápida y positiva a sus reclamaciones. En efecto, dichos trámites, en el mejor de los casos, no serían tomados en consideración: y luego, ante la insistencia de las clases populares, la norma sería que los agentes de dominación fuesen autoridades o las figuras patronales reaccionaran desdeñosamente, humillando y ofendiendo a dichas solicitudes, y por último haciendo uso de la represión física.¹¹ De ahí que entre la población popular se desarrollara una clara percepción de estar marginados de los intereses estatales.

En este cuadro las fórmulas democráticas se encontraban vaciadas de contenidos para esas clases populares, en tanto sus intereses no tenían la posibilidad de representarse y de tener acceso a las fuentes de poder. Esto, a su vez, negaba la posibilidad de constituir mecanismos institucionales legítimos de mediación política, que permitieran el reconocimiento de los varios sujetos sociales y políticos, capaces de llegar a compromisos destinados a regularizar la distribución

¹¹Parodi, Jorge, *Ser obrero es algo relativo... obreros, clasismo y política*, Lima, Instituto de Estudios Peruanos. 1986.

de los recursos sociales. Relación que, además, debería facilitar la simbiosis cultural necesaria para lograr la integración nacional de las clases sociales.

La movilización popular alrededor de nuevas formas organizativas, sin que se acompañara por la definición de modalidades institucionales de incorporación política, produjo el fortalecimiento de los patrones de comportamiento político de corte tradicional. En efecto, en estas situaciones se observó, de un lado, el fortalecimiento de las prácticas clientelistas de índole interpersonal como manera de subordinar o de allegarse una "protección" a cambio de la prestación de servicios; mientras que, de otro lado, se revitalizaba la concepción y la práctica de la confrontación y la violencia, como medio válido y efectivo para *conquistar* las reivindicaciones inmediatas y, en general, los derechos ciudadanos.

La lucha "hasta sus últimas consecuencias", como reza la típica declaración reivindicativa, significa también rechazar tajantemente la posibilidad de ofrecer algún tipo de "concesión", en tanto ello equivaldría a derrota y/o traición. De ahí que la lucha estaría asociada con la amenaza y el despliegue de la violencia como único mecanismo seguro para *arrancar y conquistar* las reivindicaciones populares.

En efecto, la violencia y la confrontación constituirían los elementos básicos del esfuerzo racional que el pueblo debería desarrollar para alcanzar la meta de la superación, en la medida en que este objetivo no sería logrado sino a costas del *enemigo*.

Así, las relaciones sociales serían evaluadas como de suma cero y, por lo tanto, ellas se desarrollarían alrededor de enfrentamientos propios de enemigos a muerte: cualquier ventaja que uno de ellos consiguiera habría sido una *conquista* arrancada al "otro" y que, por lo tanto, debería ser defendida permanentemente, en la medida en que éste siempre estaría en disposición de recuperar la pérdida sufrida.

De ahí que en el vocabulario político el concepto de negociación tiene una fuerte connotación peyorativa, asociada a la traición y engaño, en el que uno compra y el otro (se) vende una determinada ventaja. Por eso mismo, el "compromiso" no existe como elemento político reconocido como aceptable y, por lo tanto, tampoco el *trade-off* tiene su correspondiente traducción. En tanto la relación política se establece en la oposición total de los diferentes actores, destinada a lograr la completa subordinación y/o eliminación del contendor, las ideas que denotan términos absolutos son las que prevalecen, tales como "todo o nada", "esto no es ni chicha ni limonada", "patria o muerte", etc. Esto no quiere decir, de ningún modo, que no exista la práctica de la negociación, el compromiso y por lo tanto de los *trade-off*, sino que todas dichas prácticas no son consideradas como confiables y legítimas.

En estas condiciones, la juventud popular incorporó en su cultura política dos prácticas aparentemente contradictorias entre sí, pero que en

la realidad aprendió a manejarlas simultánea o alternativamente: de un lado, la de carácter manipulatorio que responde al establecimiento, desarrollo y refuerzo de lazos de patronazgo y de clientelismo tradicional, de carácter interpersonal, asociados con ciertos patrones culturales tradicionales como el "arribismo", el "oportunismo" individual. Del otro lado, la práctica de lucha y enfrentamiento cristalizó en la cultura política de la juventud popular, al recibir su consagración teórica por la incorporación de la concepción marxista de la lucha de clases. Así, por diferentes vías y condiciones, las dos prácticas políticas tradicionales se verían revitalizadas.¹²

En este escenario cargado de hostilidad y enfrentamiento y en el que la cultura política estaba signada por la violencia y la subordinación, las clases populares lograron ganar posiciones durante la década de 1960 a través del uso de dichas prácticas. Los partidos políticos de entonces, sin llegar a reconocer los mínimos derechos de ciudadanía del campesinado, tuvieron que incorporar a regañadientes algunas de las peticiones populares urbanas en la acción legislativa, dictando medidas asistencialistas a fin de asegurar la dependencia y subordinación de dichas masas populares.

Es así como la educación, el empleo y los servicios públicos urbanos se ampliaron, y en algunos casos de manera considerable y efectiva, alentando el flujo migratorio y motivando que se reforzaran las aspiraciones y exigencias organizadas de las clases populares. Así, las movilizaciones que las nuevas capas profesionales de las clases medias dirigieron para lograr la realización de las "transformaciones estructurales", destinadas a democratizar y nacionalizar la sociedad, la política y la cultura, pasaron a constituir el eje de las luchas sociales de las clases populares. En dichos "combates" se decidían, simultáneamente, la eliminación de las diferentes formas de explotación y discriminación racial, social, cultural y se abrían los cauces para la *superación* individual y colectiva del pueblo, en el campo y en la ciudad.

Simultáneamente a estos cambios en la composición de las clases populares urbanas, se observó una importante modificación en la constitución y orientación de las clases medias, especialmente de sus sectores profesionales, tal como se ha dicho anteriormente. Es indudable que las transformaciones políticas e ideológicas ocurridas en el nivel internacional durante la década de 1960 tuvieron una importancia decisiva en este sentido: pero además las manifiestas insuficiencias y las contradicciones generadas por el anacrónico régimen de dominación oligárquico influyó definitivamente en la reorientación ideológica de los nuevos cuadros intelectuales, de la Iglesia y las fuerzas armadas.

¹²Bouricaud, F. *El tema de la violencia en Yawar Fiesta*, Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, 1970.

Una de las importantes consecuencias de estas transformaciones fue el desplazamiento político e ideológico de los sectores profesionales de las clases medias, de las posiciones "reformistas" hacia las "revolucionarias", condicionando la formación y el desarrollo de la "nueva izquierda" peruana, principalmente entre la juventud universitaria y los nuevos contingentes obreros, en su mayoría jóvenes provincianos. Este desarrollo, juntamente con la nueva vocación "popular" de la Iglesia y los nuevos planteamientos en las fuerzas armadas, sentaron las bases de la ideología y prácticas políticas de carácter radical en las clases populares del país.

Frente a la "transa" semiclandestina que los jefes de los partidos reformistas llevaban a cabo con la oligarquía y el imperialismo, "traicionando" las promesas de transformación social, la juventud de la nueva izquierda se propuso revolucionar el orden social y lograr su democratización social: por medio de una práctica política totalmente diferente a la que los "viejos" políticos habían establecido en el país.

Esto suponía la definición de propósitos, tareas y compromisos totalmente novedosos. Es decir, organizar y movilizar los intereses y las clases populares a través de luchas y combates sociales que "llegaran hasta sus últimas consecuencias", como reza cualquier manifiesto reivindicativo, rechazando toda idea de negociación y concesión. De esta suerte se buscaba tensar al máximo la voluntad y la capacidad de los individuos y los grupos, fundando así un nuevo sentido colectivo, ajeno a la colonial "blandura peruana" que habría llevado a los reformistas a ceder frente a las amenazas y tentaciones oligárquicas. Sólo por medio de luchas y combates sociales se podría arrancar conquistas reivindicativas a los enemigos que, indistintamente, podían estar representados por el patrón, el propietario, el Estado o la autoridad universitaria.

La percepción real de una sociedad dividida y en la que diferentes actores antagonizaban mutuamente, la juventud popular y de clase media radicalizada expresaba su rechazo moral a toda idea de moderación y, en cambio, enfatizaba la de combate y sacrificio, asociada con la idea cuasirreligiosa de entrega total para la construcción de un nuevo mundo y de un "hombre nuevo".

Las creencias y prácticas que afirmaban el voluntarismo y que se encontraban asociadas al mito de la superación, iban a la par con las que reconocían la necesidad y la conveniencia del abierto enfrentamiento y la violencia en el desarrollo del comportamiento político. Los textos de Mao no vendrían sino a justificar teóricamente lo que sería una conclusión arrancada de la cotidiana experiencia.

Pero, contrariamente a lo que se podría imaginar, las viejas prácticas clientelistas y autoritarias no sólo no fueron desplazadas del nuevo escenario político, sino que se revitalizaron y acomodaron a las

nuevas circunstancias, insertándose en las nuevas orientaciones e interpretaciones ideológicas y luchas en las múltiples organizaciones izquierdistas. En efecto, desde entonces se estableció una relación entre las masas populares movilizadas y las nuevas dirigencias políticas de clase media, intelectuales y profesionales, que tendía a reproducir las versiones oligárquicas de dependencia y autoritarismo, a cambio de la canalización y satisfacción de las demandas de los nuevos sujetos sociales.¹³ De ahí que se desarrollara un comportamiento que, simultáneamente, tuviera características radicales, en tanto expresara una solidaridad de clase y combatividad "hasta sus últimas consecuencias", juntamente con la constitución y fortalecimiento de identidades alrededor de personalidades capaces de convocar lealtades y distribuir recompensas colectivas e individuales.

En estas condiciones, el gobierno de la fuerza armada decretó la realización de su revolución (1968-75) con la explícita intención de satisfacer demandas populares y dar paso a una forma autoritaria de modernización económica y social del país. Mientras que, por un lado, el gobierno amplió de manera dramática la participación social de las clases populares -mediante el reconocimiento de sindicatos, comunidades laborales, la reforma educacional, etc.- de otro lado, y debido a su naturaleza castrense, negaba la posibilidad de la participación política de los supuestos beneficiarios de las reformas que dictaba. Fue alrededor de esta disonancia que los intelectuales gobiernistas alentarían con su encendida retórica nacionalista y antiimperialista, que se desarrolló una creciente movilización popular que el gobierno estaría incapacitado de canalizar y controlar, que desembocó en la generalización de la radicalización de las organizaciones populares urbanas, sellando el desarrollo y desenlace de la revolución del general Velasco.

En este desarrollo organizativo y político de las clases populares urbanas, nuevamente su juventud jugó un papel decisivo. Esto era así, en tanto que ahora ella se encontraba en capacidad de experimentar de manera muy especial el desarrollo de dicho bloqueo y, al mismo tiempo, de contar con la disposición y los recursos para romper con dichas ataduras.

En efecto, la considerable expansión del sistema educativo a los sectores populares, como se ha dicho anteriormente, se acompañó de una significativa modificación de la composición de los sectores medios, particularmente de sus elementos intelectuales. Este hecho determinó que se observara la radicalización política del magisterio y con él, de los contenidos educacionales, en la que se recogía la tradición antioligárquica y se le agregara elementos revolucionarios. De ahí que el magisterio asumiera de manera muy generalizada una ideología "maoísta",

¹³Ver, por ejemplo, J. Parodi, *Ser obrero es algo relativo*, ob. cit.: J. Cotler, *Partidos....ob.cit.*

en la que se ventilara de manera muy evidente las reivindicaciones de sectores medios de origen provinciano-serrano.

En segundo lugar, la expansión industrial de los años sesenta había favorecido el desarrollo de segmentos juveniles en la clase obrera, que se caracterizaban por su alto nivel educativo, por estar concentrados en las industrias más dinámicas y por no haber tenido experiencia en la tradición sindical aprista o, en todo caso, por haber tenido que luchar contra ella.

Es así como los contingentes juveniles de las clases populares, constituidos por estudiantes y obreros, protagonizaron y dirigieron intensas y relativamente exitosas movilizaciones populares. A ellos se sumaron, legitimando la nueva tendencia radical, los jóvenes intelectuales de las clases medias que defeccionaban de los cuadros reformistas y los sacerdotes que apoyaban la iglesia "popular".

La decisión del Jefe del Apra de mantener a su partido fuera del escenario político, en una actitud de "*wait and see*", y del Partido Comunista de dar su "apoyo crítico" al gobierno militar, creó las condiciones favorables para que la prédica y la acción radical de múltiples grupúsculos izquierdistas echaran raíces en sectores claves de la sociedad, creando una corriente "clasista", es decir, una cultura radical, que se implantó en las organizaciones sindicales, las organizaciones populares de los barrios, las federaciones estudiantiles y campesinas. En general, a partir de entonces, en la sociedad peruana se fundó una cultura radical que penetró en todos los diversos niveles de la sociedad civil-popular en desarrollo.

Fue en este marco que el general Velasco optó por una política económica fundada en el distributivismo y en el endeudamiento externo, que marcó el inicio de la crisis económica, sin poder calmar las nuevas corrientes radicalizadas de la sociedad. Su sucesor, el general Morales Bermúdez, enfrentó la crisis y la nueva dinámica social bloqueando las formas de participación que se habían reconocido en el período previo del mismo gobierno militar, agitando aún más el descontento que se tradujo en una franca oposición.

Así, a la carencia de mecanismos institucionales de negociación política se sumó el deterioro creciente de las condiciones de vida y la agudización de las tensiones sociales y políticas. De ahí, precisamente, los éxitos de los paros nacionales de 1977 y 1978, que marcaron un hito en la historia contemporánea del país, al decretar la consolidación del radicalismo político en la juventud y, en general, de las clases populares.

En resumen, a partir de la década de 1960 se experimentó una primera oleada de radicalización de la juventud popular, asociada al proceso de rápidos cambios sociales y luego catalizada por el bloqueo político del gobierno militar. Luego, a partir de mediados de 1970 se inició una segunda oleada de radicalización juvenil, cuando se fueron cerrando

las vías de movilidad ocupacional y de ingresos, así como de organización social, mientras se daba inicio a una inédita apertura política de naturaleza democrática.

Si la primera oleada de radicalización política se caracterizó porque se desarrolló en el marco de la participación institucional de la juventud popular y el establecimiento de una racionalidad entre las demandas y los medios de acción elegidos, la segunda, en cambio, bloqueada económica y socialmente, combina expresiones inorgánicas y violentas -tanto a nivel individual como colectivo- con marcadas preferencias electorales hacia las formaciones políticas de notoria tendencia popular, el Apra y la Izquierda Unida.

El "desencanto" y la revolución.

La apertura política y la reanudación significativamente ampliada del sistema representativo desde 1980, sirvió para atemperar, relativamente, los ánimos belicosos de las clases populares, hecho que las izquierdas tardaron en reconocer y comprender: el avasallador triunfo de un candidato de centro-derecha, como Belaúnde, se inscribía en ese cuadro. En tanto él logró construirse una imagen pluralista, a diferencia de la figura sectaria de sus contendores, llegó a personificar la institucionalización de la negociación política. En ella se incorporarían legítimamente los representantes y las demandas populares, con la consiguiente promoción de sus condiciones de vida y de movilidad social.

Así, súbitamente, se pasaba, sin solución de continuidad, de un tipo de comportamiento político en el que se privilegiaba la confrontación, a otro en el que se inclinaba por el auspicio, comprensión y patronazgo personal, fundado en la generosidad y "gallardía" del Presidente. De esta manera la promesa democrática de los ochenta fue entendida como el encuentro entre el Estado y la sociedad, en tanto clases populares, gracias a la mediación personal del Jefe del Estado.

Sin embargo, desde sus inicios el gobierno pretendió jugar a dos cartas que se contradecían mutuamente. De un lado, estableció una política de ajustes económicos de naturaleza recesiva que se ceñía a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, mientras que, del otro lado, buscaba la consecución de un "pacto social" a fin de establecer el consenso como práctica política que favoreciera la "unidad y el desarrollo". Sin embargo, las encontradas orientaciones de dichas medidas limitaron las posibilidades de la Comisión Tripartita que se estableció con el propósito de pacificar e institucionalizar las relaciones obrero-patronales.

En la medida en que se "ajustaba" la economía, la producción cayó de manera estrepitosa, estrechándose, aún más, el mercado interno. Paralelamente, se intensificaron los despidos de los trabajadores, se redujeron los salarios, aumentó de manera significativa el empleo eventual y la subcontratación, así como el trabajo independiente, que serían englobados, de manera indiscriminada, en el llamado "sector informal".¹⁴ Este proceso culminaría en una reconcentración del ingreso y la riqueza, que haría del Perú un caso que se destacaría en el contexto sudamericano.

Esta situación, que venía arrastrándose desde mediados de la década anterior, al iniciarse la "segunda fase" del gobierno militar alcanzó dimensiones dramáticas en el gobierno de Belaúnde, y fue calificada como la crisis más grave que el país habría sufrido en su historia republicana, sólo comparable con la derrota en la guerra del Pacífico, en el siglo pasado.

De otro lado, la oferta de plazas universitarias no creció al ritmo de la demanda. Además, tanto la estructura productiva como la educativa inciden en la existencia de un estrecho mercado "formal" de trabajo, incapaz de absorber a los jóvenes egresados de colegios y universidades.

A esto se sumó el estilo oligárquico de conducción política del Presidente Belaúnde: delegó entre sus amigos, familiares y allegados personales las responsabilidades de la dirección gubernamental, mientras que valiéndose de su señorial "gallardía" procuraba atender asistencialmente los requerimientos populares. Pero, de otro lado, se mostraba reacio a aceptar las reclamaciones de la opinión pública y el establecimiento de mecanismos de negociación y entendimiento que dieran cabida a la constitución de fórmulas consensuales, tales como las que había ofrecido durante su campaña electoral.

Frente a las altas y generalizadas expectativas respecto de las posibilidades del régimen democrático y concretamente del gobierno de Belaúnde, este tipo de desempeño político motivó que se desarrollara en la sociedad, y muy particularmente en la juventud popular, un generalizado sentimiento de escepticismo y frustración en relación al carácter "formal" de la democracia y al sistema político en general.

Es así como Belaúnde vino a personificar la restauración de un Estado indispuesto y hostil hacia las clases populares y medias, particularmente a sus capas juveniles, que poco tienen y aspiran a ser considerados ciudadanos, en plenitud de sus derechos. De esta manera se recrearon las tradicionales condiciones del antagonismo social, en las que ninguno de los actores puede reconocer sus intereses particulares

¹⁴ Galin, Pedro, Carrión Julio, y Castillo, Carlos, *Asalariados y Clases Populares en Lima*, Instituto de Estudios Peruanos, 1986.

en términos colectivos. Nuevamente el "otro" no aparece como un competidor sino como un enemigo, con el que no se debe negociar sino bajo una situación de fuerza, como para asegurar que será doblegado y, en el mejor de los casos, derrotado. Es decir, las relaciones políticas se presentarían como para los militares, en la continuación o el sustituto de las acciones bélicas.

En estas condiciones, paradójicamente, el sindicalismo se debilitó considerablemente,¹⁵ entre otras razones porque no amplió su representatividad respecto de los trabajadores eventuales, predominantemente jóvenes, manteniendo en cambio su carácter de órgano de defensa de los trabajadores estables, mayormente adultos, ocupados especialmente en las medianas y grandes empresas. Esta situación condicionó que los jóvenes de los sectores populares tuvieran un restringido acceso a la sindicalización y que los gremios tuvieran una limitada capacidad de convocatoria en esta generación.

Esta restringida participación de la juventud popular en diversos planos organizados de la economía y de la sociedad, ha coincidido con el hecho de que los partidos políticos que se fundan y, supuestamente, se orientan en razón de los intereses populares, no han desarrollado estructuras de encuadramiento organizativo e ideológico de las clases populares en general, y tampoco de su juventud. De esta manera, a la carencia y, en el mejor de los casos, la debilidad de los mecanismos de integración social, que respondan a las nuevas condiciones en las que se desenvuelve la sociedad, se suman las mismas ausencias en relación a los mecanismos de integración política.

En estas difíciles circunstancias, la participación del Apra y de la Izquierda Unida en el escenario político contribuyó de manera decisiva en la consolidación del régimen democrático. Pero esto vino a significar que los jóvenes dirigentes radicales de la década pasada tuvieran que asumir posiciones "moderadas" y que su actuación política tuviera que acomodarse en el marco constitucional, que los definiría por su carácter "reformista", mientras que su discurso siguiera orientándose hacia la construcción de una "utopía" socialista (que por cierto no se confundiría con el socialismo realmente existente).

Este comportamiento pronto cobró sus víctimas en la juventud que "perdió la mística" de los años setenta, correspondientes a los años de la "creación heroica": promovió el escepticismo hacia la política y los políticos, favoreciendo, en cambio, que las esperanzas populares se concentraran en la figura del líder populista y carismático. En efecto,

¹⁵Balbi Carmen Rosa, y Parodi, Jorge, "Radicalismo y Clasismo en el movimiento sindical peruano", *Socialismo y Participación*, núm. 26; Jorge Parodi, "La desmovilización del sindicalismo", en *Movimientos sociales en América Latina*, Lima, Desco, 1986.

como es conocido desde las hipótesis de Marx sobre el bonapartismo, en condiciones de dispersión y fragmentación política, las masas populares persiguen y contribuyen a la constitución de liderazgos autoritarios y carismáticos que asuman su representación y velen por sus intereses.

Pero, de otro lado, la debilidad e inoperancia de las instituciones supuestamente destinadas a canalizar las crecientes y urgentes demandas populares y juveniles en los diferentes niveles de la sociedad, la política y el Estado, abren un espacio para alternativas de violencia política.

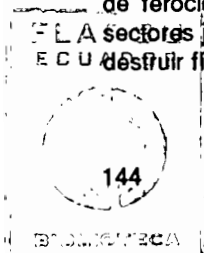
Esta tendencia a la violencia se habría reforzado ante el permanente descenso de las condiciones de existencia de las clases populares, particularmente de los jóvenes que ven frustradas las posibilidades de asegurar su éxito. En segundo lugar, por la manifiesta ineficacia del sistema político, de los partidos y del clasismo sindical, para incorporar y ampliar la participación política de dichas clases y de esta suerte asegurar su relativa mejoría en los distintos planos de la existencia nacional. Es decir, la promesa democrática de principios de los ochenta tiende a erosionarse rápidamente.

Así, el significativo descenso de los niveles de vida y el cierre de toda perspectiva de éxito, sumada a la indisposición del sistema político para construir instituciones capaces de incorporar políticamente a estas clases populares en el establecimiento de formas consensuales de distribución de los recursos y las oportunidades sociales, habría producido una exacerbación de las percepciones y actuaciones sociales de enemistad, enfrentamiento y hostigamiento que desembocan en la violencia. De ahí también la atracción de cualquier versión que justifique la inevitabilidad de la violencia.

Este desarrollo coincide y ha sido tenazmente promovido por Sendero Luminoso, que ha logrado constituirse en polo de atención y atracción, especialmente de sectores juveniles serranos, de segunda generación migrante a las ciudades, que después de alcanzar elevados niveles educacionales descubren frustrados y desilusionados que el orden existente bloquea y rechaza su incorporación y movilidad en la nueva dinámica social.

Así, mientras la primera oleada de radicalización juvenil, iniciada a mediados de los sesenta, parecería haber conducido en buena medida al proceso de radicalización del conjunto de las clases populares, la segunda oleada, de los ochenta, se ve relativamente distanciada por su inorganicidad del resto de las clases populares y parecería proclive a inclinarse por Sendero Luminoso.

Este, al negar y rechazar toda validez al régimen político con actos de ferocidad insólitos, parece expresar el desorbitado voluntarismo de sectores juveniles que apuestan a la violencia como la única medida para destruir física y socialmente a todos los enemigos, no sólo de clase, sino



a todos los múltiples reformismos, así como la de todos aquellos sectores populares organizados, en la ciudad como en el campo, que no acatan la debida subordinación al fundamentalismo mesiánico de su ideología.

